

España, entre los países de la OCDE con impuestos al trabajo más altos

CUÑA FISCAL/ España se sitúa cinco puntos por encima de la media de la OCDE, por encima de Noruega y Dinamarca y es de los pocos países que no ha reducido la carga tributaria en la crisis del Covid.

Mercedes Serraller. Madrid

La fiscalidad sobre el trabajo en los países de la OCDE se redujo de media en 2020 respecto al año anterior 0,39 puntos, hasta el 34,6% de la remuneración bruta, en parte por las políticas fiscales de los gobiernos para capear con la crisis económica del Covid. Así lo concluye el informe *Taxing Wages 2021* de la OCDE, difundido ayer, que muestra que España se sitúa entre los países con impuestos al trabajo más altos, hasta cinco puntos más que la media, y que además es de los pocos que no ha tomado medidas para reducir la carga fiscal del trabajo ante la crisis del Covid.

De los 37 países de la OCDE, 29 redujeron la cuña fiscal en el trabajo, entendida como la carga fiscal incluyendo el impuesto sobre la renta y las cotizaciones sociales pagadas por la empresa y el trabajador. Esa bajada se debe en parte a una caída del nominal del salario medio en 16 países y también a “cambios de naturaleza política”, que incluyen medidas de exención fiscal y de ayudas en respuesta al Covid.

A la cabeza del ranking se sitúa Bélgica, con un 51,5%, seguida de Alemania, con un 49%, Austria (47,3%), Francia (46,6%), Italia (46%), República Checa (43,9%) y Hungría (43,6%). Los belgas son los únicos que deben transferir a la Administración y la Se-

España es de los países en los que las empresas pagan más cotizaciones sociales

guridad Social una suma mayor de su salario de la que ellos reciben en neto.

España se sitúa en la parte media-alta de la tabla, con el 39,9% del salario medio (la OCDE lo calcula en torno a los 27.000 euros anuales para un soltero sin hijos), casi cinco puntos por encima de la media de la OCDE (34,6%), y por delante de Noruega (35,8%), Dinamarca (35,8%) o Islandia (32,3%).

En el otro extremo, se encuentran Colombia (0%), Chile (7%), Nueva Zelanda (19,1%), México (20,2%), Suiza (22,1%), Israel (22,4%), Corea del Sur (23,3%), Estados Unidos (28,3%) y Australia (28,4%). En Colombia, un trabajador con un salario como el analizado no paga Impuesto sobre la Renta y las cotizaciones sociales de la empresa y trabajador son facultativas.

También están en la parte baja Reino Unido (30,8%), Irlanda (32,3%) y Japón (32,7%).

España es además el octavo país en el ranking de más carga fiscal al trabajo en el caso de parejas con uno y dos sueldos.

Mientras que en la OCDE

LA BRECHA FISCAL EN EL TRABAJO

Carga fiscal total incluyendo el Impuesto sobre la Renta y las cotizaciones sociales pagadas por la empresa y el trabajador, en porcentaje.

> Los que más pagan

Bélgica	51,5
Alemania	49
Austria	47,3
Francia	46,6
Italia	46
R. Checa	43,9
Hungría	43,6
Eslovenia	42,9
Suecia	42,7
Letonia	41,8
Portugal	41,3
R. Eslovaca	41,2
Finlandia	41,2
Grecia	40,1
Turquía	39,7
España	39,3
Luxemburgo	37,5
Lituania	36,9
Estonia	36,9

> Los que menos pagan

Países Bajos	36,4
Noruega	35,8
Dinamarca	35,2
Polonia	34,8
Media de la OCDE	34,6
Japón	32,7
Irlanda	32,3
Islandia	32,3
Reino Unido	30,8
Canadá	30,4
Australia	28,4
Estados Unidos	28,3
Corea	23,3
Israel	22,4
Suiza	22,1
México	20,2
Nueva Zelanda	19,1
Chile	7
Colombia	0

Expansión

Fuente: OCDE

la carga fiscal sobre los salarios se redujo 0,39 puntos porcentuales respecto a 2019, en España el retroceso se limitó a 0,12 puntos básicos. En este punto, España destaca entre los pocos países que no han tomado medidas para aligerar la carga fiscal del trabajo en 2020, en concreto, seis, aunque cabe señalar que algunos de estos sí han aprobado estímulos en otros impuestos, a diferencia de España. Cabe recordar que España ha subido en 2021 el IRPF

La OCDE subraya que la bajada de la fiscalidad salarial

de 0,39 puntos es “notable”, pero está aún lejos de las de 2008 (0,84 puntos) y 2009 (0,52 puntos), las dos mayores desde que se inició la serie en el año 2000.

En concreto, en España el IRPF pesó un 11,4% sobre el salario, frente al 13,1% de la media de la OCDE. Por su parte, las cotizaciones sociales pagadas por las empresas supusieron el 23% y las abonadas por los trabajadores, un 4,9%, cuando el promedio de los miembros de la organización de los países desarrollados se situó en el 13,1% y el

8,3%, respectivamente.

España es de los países en los que las empresas pagan más cotizaciones sociales, más del 20% de los costes laborales. Respecto a los costes de las empresas, Francia es el país en el que los empleadores pagan más dentro de la OCDE, el 26,6% del salario bruto del trabajador. España, entre los países que están en primera línea, se coloca en quinta posición, con un 23%, sólo por detrás, tras Francia, de República Checa (25,3%), Estonia (25,3%), Italia (24%) y Suecia (23,9%).

Ayuso: “La izquierda quiere embarrar el terreno y deslegitimar nuestra victoria”

Expansión. Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP en las elecciones autonómicas, Isabel Díaz Ayuso, participó ayer en un encuentro digital con *El Mundo* en el que acusó a los partidos de la izquierda de tratar de “embarrar” el terreno electoral para “hablar de otras cosas” y “deslegitimar una victoria” que, según todas las encuestas, obtendrá holgadamente.

Ayuso respondió a las preguntas del director adjunto de *El Mundo* Joaquín Manso

y del jefe de la sección de Madrid, Jaime Rodríguez, y, sobre su posible alianza con Vox dijo: “Al final, somos partidos distintos, pero nos hemos entendido en cuestiones fundamentales, y así seguirá siendo. Con quien no tengo absolutamente nada que ver es con el sanchismo y de ahí hacia la izquierda extrema”.

A sólo cinco días de que se celebren las elecciones, la candidata del PP reiteró que aspira a tener su “propio proyecto” porque “cuando la cabeza, la boca y el corazón es-

tán en la misma dirección todo se ejecuta mucho mejor”, además de reivindicar que tiene “a los mejores gestores”.

Ayuso afirmó que contar con el apoyo de Vox “no es el fin del mundo” e incidió en que “los malos perdedores están intentado embarrar esto para hablar de las cosas que no pasan y silenciar las que sí están sucediendo”.

Si se confirma su victoria en las urnas, la candidata popular deberá afrontar el levantamiento de las restricciones a la movilidad y afirmó

que “el Gobierno está esperando a las elecciones de Madrid para tomar las decisiones que considera impopulares y que necesitamos conocer los presidentes autonómicos, las empresas y los ciudadanos, pero que no van a llegar hasta que acaben los comicios. Estamos en un sentido normativo y lo que todos queremos es una ley sensata que no restrinja derechos fundamentales y que cuando se tengan que adoptar medidas, se haga con todas las garantías”, subrayó.



Isabel Díaz Ayuso, ayer en las instalaciones de 'El Mundo'.

La FEMP reclama a Montero 753 millones por el IVA de 2017

Expansión. Madrid

Al pulso que mantienen las comunidades autónomas con Hacienda por la liquidación del IVA de 2017 se sumaron ayer los ayuntamientos. El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, anunció que los consistorios españoles reclamarán “inmediatamente” al Gobierno el pago de los 753 millones de euros que les adeuda por la liquidación del IVA de diciembre de 2017. “Hoy mismo (por ayer) desde la FEMP nos ponemos en marcha para reclamarle a la actual ministra de Hacienda que pague la deuda que contrajo con nosotros el señor Montoro”, afirmó Caballero.

Este anuncio se produjo después de la sentencia del Tribunal Supremo que obliga al Estado a devolver a Castilla y León 182 millones de euros tras su reclamación por la modificación del plazo de pago del IVA que aprobó el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro al poner en marcha el denominado suministro inmediato de información (SII) en el IVA a partir de julio de 2017. Un problema heredado del Gobierno del PP que el actual Ejecutivo no ha resuelto hasta ahora. Si bien consignó 2.500 millones de euros en el proyecto de Presupuestos de 2019, que finalmente tumbó el Congreso, la ministra de Hacienda aseguraba en enero pasado que ese montante no se devolvería porque ya “no existe”, al haberse producido el ajuste en términos de Contabilidad Nacional hace dos años.

El panorama ha cambiado, sin embargo, con la sentencia del Supremo. De hecho, aunque el Gobierno cifra esa deuda en 2.500 millones, las CCAA aspiran a recuperar más de 4.100 millones. En muchas de ellas la reclamación al Gobierno está judicializada, como son los casos de Madrid, que reclama 377 millones; Andalucía, donde el ejecutivo de Juanma Moreno acudió a la vía contencioso administrativa para recuperar 534 millones; Galicia, que demandó por vía judicial al Estado y espera conseguir los 204 millones que se le adeudan, o Castilla-La Mancha, gobernada por el socialista Emiliano García-Page, que reclama 130 millones.